

El conflicto de los asalariados estatales del año 2007 en Santa Cruz

Auzoberria, Miguel; Britos, Christian; Huenul, Hugo; Luque, Elida; Martínez, Susana
(Grupo Contraviento)

Resumen:

Entre los meses de marzo y agosto del año 2007 se produjo en la provincia de Santa Cruz, Argentina, un conflicto social protagonizado por trabajadores dependientes del estado provincial organizados sindicalmente: docentes, judiciales, empleados legislativos y municipales de Río Gallegos en reclamo de aumento del salario básico y convocatoria a paritarias.

Conflicto que comenzó como un reclamo económico corporativo y terminará dando lugar a la conformación de un movimiento de oposición al Frente Para la Victoria (FPV); ello en un contexto nacional de creciente reagrupamiento de los sectores del capital más concentrado contra el gobierno nacional, que se expresará claramente al año siguiente en el denominado conflicto de las patronales del campo.

El trabajo constituye así un análisis de situación que aborda como campo de problemas: -la cuestión de la organización en el plano sindical de fracciones y capas de trabajadores y las alianzas que establecen; -la crisis de una alianza social.

Palabras clave:

Trabajadores estatales; Movimiento sindical; Conflicto social; Alianza social; Patagonia.

Abstract:

Between March and August of 2007 a social conflict took place in the province of Santa Cruz, Argentina, which was carried out by workers of the public sector organized in trade unions: teachers, judicial, legislative and municipal employees of Rio Gallegos, in demand of an increase of the basic salary and the convening of collective negotiations.

Such conflict began as a corporate economic claim and will end up leading to the formation of an opposition movement to the Frente Para la Victoria (FPV); this in a

national context of constant regrouping of the most concentrated capital against the national government, which will be clearly stated the following year in the so-called landowners' conflict.

This paper constitutes a situational analysis, that addresses as field of work: - the question of the organization at the trade union level of different fractions and layers of workers and the alliances that they establish; -the crisis of a social alliance.

Key words:

Public workers, Union movement, Social conflict, Social alliances, Patagonia

1. Introducción

Entre los meses de marzo y agosto de 2007 se produjo en la provincia de Santa Cruz un conflicto social que tuvo amplia cobertura de parte de los medios de comunicación nacionales por tratarse de la provincia natal del entonces presidente Kirchner. Fue protagonizado por trabajadores dependientes del estado provincial: docentes, judiciales, empleados legislativos y municipales de Río Gallegos que conformaron un frente gremial que se denominó Mesa de Unidad Sindical (MUS).

A partir de las transformaciones de los años noventa y la privatización de las empresas estatales (YPF, YCF y Gas del Estado), la repulsión de población por parte del gran capital hará que aumente en la provincia la tasa de desocupación, históricamente baja, y que el empleo público provincial crezca significativamente. Sin embargo, la década del 90 se caracterizó por una escasa conflictividad en el sector público, siendo los protagonistas de las luchas y movilizaciones los trabajadores privados y desocupados¹. A partir de 2004, en un momento de recuperación de derechos de los trabajadores a nivel nacional, los empleados públicos recobrarán en la provincia su protagonismo en la lucha por revertir políticas que en los noventa cercenaron muchos de sus derechos.

Como consecuencia del conflicto del 2007 los trabajadores estatales obtuvieron aumentos del salario básico, blanqueo de sumas “en negro” y convocatorias a paritarias.

Por otra parte, en el plano político, lo que comenzó con una huelga del sector docente terminará dando lugar a la conformación de un movimiento de oposición al Frente Para la Victoria (FPV); ello en un contexto nacional de creciente reagrupamiento de los sectores del capital más concentrado contra el gobierno nacional, que se expresará claramente al año siguiente en el denominado conflicto de las patronales del campo.

Surgirán así a partir del conflicto, agrupaciones políticas opositoras al gobierno integradas por dirigentes sindicales que participaron activamente, como Encuentro

¹ Luque, Élida y Susana Martínez, “Los trabajadores de la zona norte de Santa Cruz frente a la emergencia del movimiento de desocupados”, en Iñigo Carrera, Nicolás (Dir.), (2011), *Sindicatos y desocupados en Argentina 1930/35 – 1994/2004. Cinco estudios de caso*, Vicente López, PIMSA – Dialektik. Luque, Élida, Susana Martínez, Miguel Auzoberría, Hugo Huenul (Grupo Contraviento), (2003), “Conflictos sociales en la provincia de Santa Cruz. Los años noventa”, en PIMSA (Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la sociedad argentina), Documentos y Comunicaciones 2003, Bs As, PIMSA, Año VII, N°7.

Ciudadano² y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)³; y gremios de la MUS (judiciales y ATE) que intentaron conformar un partido de trabajadores⁴. La UCR que había conformado una alianza electoral denominada Cambiemos para crecer⁵ y Encuentro Ciudadano fueron los partidos que capitalizarán el mismo convirtiéndose así en la expresión política del movimiento de oposición; el FPV si bien retendrá la gobernación, su caudal de votos se verá reducido en un 13%.

La confrontación kirchnerismo – antikirchnerismo que se expresará a nivel nacional a partir del enfrentamiento con las patronales rurales del 2008 se manifestará así en Santa Cruz de forma anticipada.

La conformación del movimiento de oposición hará visible la existencia de dos alianzas: una alineada con el proyecto encabezado por Néstor Kirchner a nivel nacional, pero que en la provincia aún mantenía respecto de los trabajadores del estado las políticas laborales de los años noventa, y otra que a pesar de reivindicar los derechos de los trabajadores estatales se alineaba con la fuerza “antipopular” que se encontraba en proceso de constitución a nivel nacional.

Partiendo de que las clases sociales se constituyen en los enfrentamientos con otras clases y/o alianzas de clases, la descripción del conflicto nos permitirá observar qué sectores de los trabajadores estatales y qué fracciones sociales participaron, qué fuerzas o cuadros políticos y organizaciones se expresaron, las alianzas que establecieron, las declaraciones públicas y las distintas formas de lucha llevadas adelante en función de las metas propuestas.

Ello en función de tratar de responder los siguientes interrogantes: ¿Estaban realmente definidas dos alianzas o es un momento de constitución de una alianza opositora en la provincia en el marco de la crisis de la alianza gobernante? ¿Qué intereses expresaban cada una? ¿Se proponía un sector de los trabajadores públicos, que

² Encuentro Ciudadano expresa los intereses de fracciones de la pequeña burguesía, con vínculos con la Iglesia Católica; conformado por exdirigentes del FREPASO, referentes sindicales y representantes de la Asociación de Abogados. En su primera participación electoral obtuvo una concejalía en Río Gallegos y una diputación provincial.

³ El MST estaba integrado por militantes sindicales en especial de ADOSAC y representantes de asociaciones profesionales.

⁴ La denominación partidaria era Movimiento Sur que integraba la CTA local pero no logró reunir los requisitos ante la Justicia electoral.

⁵ La fórmula de Cambiemos para crecer a la gobernación la encabezaba Eduardo Costa: empresario que monopoliza la venta de materiales de construcción y de automotores en la provincia. Posee inversiones en este rubro en las ciudades patagónicas más importantes; en el 2006 intentó sin éxito obtener concesiones de áreas petroleras en Santa Cruz asociado a Sipetrol, filial de la empresa ENAP, de capitales chilenos.

podría caracterizarse como pequeña burguesía asalariada estatal, conducir una alianza opositora con fracciones de pequeña burguesía?

El trabajo constituye así un análisis de situación que aborda como campo de problemas: -la cuestión de la organización en el plano sindical de fracciones y capas de trabajadores y las alianzas que establecen; -la crisis de una alianza social.

2. Los asalariados estatales en el año 2007, el contexto nacional

A nivel nacional el inicio del ciclo lectivo 2007 estuvo signado por conflictos⁶; en Buenos Aires, Capital Federal, La Rioja, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan y Santa Cruz las clases no iniciaron normalmente y avanzado el mes de marzo en las provincias de Santa Fe, San Luis, Corrientes, Misiones, Catamarca y Neuquén, -donde se producen movilizaciones y cortes de ruta-, Salta, Jujuy, Mendoza, Chaco y Río Negro trabajadores del sector público sostenían medidas de fuerza. Este proceso tendrá como hecho más significativo la huelga declarada por CTERA –a la que se sumaron la CTA y la CGT⁷– del 09 de abril en repudio al asesinato del docente Carlos Fuentealba por la policía provincial neuquina.

La conflictividad sindical no se reducía al sector docente; en varias provincias trabajadores estatales de la salud y empleados administrativos protagonizaban medidas de fuerza en pos de mejoras salariales y laborales.

El 2007 es así un año de alta conflictividad en el sector público; los hechos de rebelión a nivel nacional realizados por los trabajadores estatales superaron a los concretados por los trabajadores del sector privado⁸. El crecimiento económico a “tasas chinas” y la expansión del empleo propiciaron el incremento de la conflictividad

⁶ La alta conflictividad de los trabajadores de la educación obligó al gobierno nacional a reglamentar el artículo N°10 de la Ley de Financiamiento Educativo, esta ley fue considerada por la CTERA como una conquista histórica, dado que permitía la constitución de la “paritaria nacional docente”, sin embargo, la falta de consenso entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales sobre el financiamiento de las diferencias que surgirían con el establecimiento del “piso salarial” retrasó la reglamentación del artículo 10 de la ley.

⁷ La CTA convocó a una huelga general de 24 horas en tanto que la CGT de una hora en coincidencia con la movilización que realizó CTERA en Capital Federal. Se trató de la única huelga general bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

⁸ Cfr. PIMSA, Documento: “Los hechos de rebelión en Argentina 2002-2007” en *PIMSA* (Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina), Bs As, PIMSA, 2009, Año XI, N° 11, pp. 228-237.

laboral⁹ durante la presidencia de Kirchner. En este marco la política laboral del gobierno se basó –entre otros aspectos–¹⁰ en revitalizar las negociaciones colectivas; indicador de ello es el notable incremento de los acuerdos y convenios homologados por el Ministerio de Trabajo de Nación a partir de 2005¹¹. En los acuerdos paritarios, la centralidad estaba puesta en la recomposición salarial, sin embargo, la evolución del salario nominal de los trabajadores del sector público y privado no seguía el mismo ritmo: en el lapso que transcurre desde 2001 a 2006, período en el cual los trabajadores registrados del sector privado tuvieron una variación del 126%, la variación para los trabajadores estatales fue de un 45%. En cuanto al poder adquisitivo la disparidad se repite, en el período 2001-2007, los trabajadores estatales tuvieron una pérdida del 22,5% de su salario real, en tanto que los asalariados privados registrados alcanzaron hacia el final del período un incremento de alrededor del 12% en su salario real comparado con el de 2001¹². A estos datos debemos sumarle el hecho de que, en gran parte de las provincias, los empleados públicos no se encontraban bajo la cobertura de las negociaciones colectivas, lo que permite comprender el grado de conflictividad protagonizado por los asalariados estatales. Desde el 2007 las tendencias observadas con relación a los niveles salariales nominales y reales comenzarán a revertirse a partir de las luchas de los trabajadores estatales que logran una aceleración de la

⁹ Varela, Paula (2013). Los sindicatos en la Argentina kirchnerista: entre la herencia de los 90 y la emergencia de un nuevo sindicalismo de base. Revista Archivos del movimiento obrero y la izquierda, N°2, <http://www.archivosrevista.com.ar.ca1.toservers.com/contenido/wp-content/uploads/2014/09/Varela.pdf>

¹⁰ Díaz, Claudio. *El movimiento obrero argentino. Historia de lucha de los trabajadores y la CGT*. Bs. As, Ed. Fabro, 2010, pp. 380/381 “...Además de las políticas públicas del período 2003/2009, que produjeron la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la mejora en la distribución del ingreso, fomento real de la negociación colectiva, la creación de puestos de trabajo, la disminución de los niveles de desocupación y subocupación y el descenso lento pero constante de la clandestinidad laboral, también se dictaron normas que generaron una progresiva y gradual recuperación de derechos cercenados. Por empezar, la norma 25.877 (de marzo de 2004) derogó la Ley Banelco, restableciendo parcialmente los derechos individuales y rescatando pilares del derecho del trabajo tales como la ultraactividad de los convenios colectivos y el principio de la aplicación de la norma más favorable”. En relación con esto se puede consultar el libro de Héctor Recalde, *Una historia laboral jamás contada...1869-2012*, Bs. As., Corregidor, 2012. cap. 5: “El Kirchnerismo y su alianza estratégica con el movimiento obrero”. Otros enfoques señalan sin embargo que “es posible mencionar algunos elementos que marcan una continuidad, o hasta una profundización, de ciertos procesos que caracterizaron al mercado de trabajo en la década pasada. Así, la precariedad laboral, la creciente segmentación del mercado de trabajo, la dispersión salarial, como el carácter estructural del desempleo, son procesos que no dejan de presentarse en la actualidad, Marticorena, Clara, “*Precariedad laboral y caída salarial. El mercado de trabajo en la Argentina post convertibilidad*”, 7mo. Congreso Nacional de Estudios de Trabajo. ASET. <http://www.aset.org.ar/congresos/7/02008.pdf>.

¹¹ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social, Informe. La negociación colectiva en 2008.

¹² Lozano, Claudio (coord.); *Las inconsistencias del índice salarial del sector público. Un análisis a la luz de los datos oficiales*; Bs As.; Instituto de Estudios y Formación-CTA; abril/2008.

recomposición de sus salarios. En este proceso a nivel nacional debe inscribirse el conflicto de los asalariados estatales santacruceños.

3. Los sindicatos de trabajadores estatales

En el 2006 los sindicatos de trabajadores estatales en Santa Cruz se encontraban agrupados en dos frentes intersindicales: la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y el Frente de Gremios Estatales (FGE).

La Mesa de Unidad Sindical (MUS), constituida a mediados del 2006, estaba integrada por sindicatos de dos centrales de trabajadores: CTA y CGT. La Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de julio” (Judiciales provinciales), nucleadas en la CTA; mientras que la Asociación del Personal Legislativo (APEL) y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Río Gallegos, formaban parte de la CGT; a su vez, adherían la Asociación Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA) de la CTA, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), estas dos últimas organizaciones pertenecientes a la CGT.

Estas organizaciones en su mayoría tradicionalmente opositoras a los gobiernos del FPV¹³, exigían el blanqueo de las sumas en “negro”, aumento de los salarios básicos y la derogación de las leyes de emergencia económica.¹⁴

¹³ A fines de la década de los '90, la lista rosa vinculada al FUT-PO junto a militantes independientes ganaron la conducción provincial y las filiales más importantes. Bajo la nueva conducción, pudieron los docentes frenar en algunas oportunidades y en otras retrasar la imposición de medidas derivadas de la ley federal en Santa Cruz.

La presencia de ATE en Santa Cruz se asocia con la explotación del carbón. Hacia finales del siglo pasado la conducción de la filial Río Turbio fue ganada por la lista negra, que agrupaba militantes independientes y del MAS realizando varias movilizaciones a Río Gallegos para manifestar su rechazo a la pasividad del gobierno provincial frente a la empresa concesionaria del yacimiento minero. Ya en el nuevo siglo, ATE comenzó un proceso de expansión de sus actividades, primero en la zona norte de la provincia afiliando trabajadores de la administración central, personal de la sanidad y municipales, luego esta expansión continuó en Río Gallegos dirigida a tener mayor presencia en el personal de la sanidad; los años 2005 y 2006 fueron de intensa actividad para ATE donde protagonizaron varios conflictos.

La Asociación gremial de empleados judiciales tuvo destacada participación en la conformación de la CTA en Santa Cruz y en el 2001 fue la responsable de organizar la “consulta popular” por el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO).

APEL es un sindicato con un número reducido de afiliados y de escasa presencia; en el conflicto que se analiza sus máximos dirigentes eran reconocidos militantes radicales.

SOEM Río Gallegos, protagonizó en las últimas décadas numerosos conflictos durante las intendencias justicialistas: en 1989 durante la gestión municipal de Néstor Kirchner, una huelga con ocupación del

La otra intersindical, conformada en el 2005, era el Frente de Gremios Estatales (FGE), integrado por la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato Regional Luz y Fuerza de la Patagonia, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias seccional Santa Cruz (FENTOS) y el Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz. Estas organizaciones integraban la CGT e históricamente sus conducciones se alinearon con el peronismo en general y en las últimas décadas con el FPV.

La administración central¹⁵ es el sector que crece de manera significativa tras el proceso de privatizaciones de empresas estatales, reflejando el modo en que el estado provincial absorbió a los desocupados que generaba dicho proceso. APAP y UPCN son sus principales sindicatos¹⁶.

corralón municipal finalizó tras el desalojo realizado por militantes políticos; en el 2000 y 2001 sus continuas acciones sindicales jaquearon al intendente justicialista Héctor Aburto quien renunció a su cargo a poco de comenzar el 2002; por último, en el 2015, una huelga de más de 100 días obligó al intendente justicialista Raúl Cantín a presentar su renuncia.

¹⁴ A dos días de asumir la gobernación Néstor Kirchner promulgó el decreto N° 139 –que luego será ratificado por la ley provincial N° 2263– donde declaraba la emergencia económica por un año: suspendía la vigencia de todos los convenios colectivos de trabajo del personal del estado provincial, facultaba al Poder ejecutivo para fijar las remuneraciones de todo el personal del estado provincial, creaba una Comisión Negociadora Salarial sin participación de los trabajadores cuya función era elaborar nuevos convenios colectivos de trabajo basados en criterios de productividad, eficiencia y presentismo, suspendía los aumentos salariales que surgieran de la aplicación de procedimientos automáticos (“ley de enganche”) y dejaba sin efecto la autarquía en materia salarial de los poderes legislativo y judicial. A poco de comenzar el año 1992 promulgaba el decreto N° 309 donde declaraba la imposibilidad de hacer frente al pago de haberes del personal del estado provincial (activos y pasivos) del mes de diciembre y de la segunda cuota del SAC, supeditaba el pago del mes de diciembre a la aprobación del convenio preexistente entre Nación y Provincia por la liquidación de regalías hidrocarburíferas, supeditaba el pago de la segunda cuota del SAC a los ingresos que surgieran de la licitación de Áreas Petroleras Primarias en Santa Cruz, reducía el salario de todo el personal del estado provincial en un 15% a los agentes que tuvieran un haber superior a \$500 excluyendo las asignaciones familiares y en un 10% a aquellos agentes que no superaran ese monto y creaba el registro de inscripción de empleados públicos que decidieran optar por el retiro voluntario.

Con posterioridad el salario adeudado del mes de diciembre de 1991 fue devuelto en seis cuotas con aplicación de intereses.

Ya en el año 1993, por medio de la ley provincial N° 2347, prorrogaba indefinidamente la situación de emergencia económica, a lo dispuesto en la ley provincial N°2263 se sumaba la implementación del “retiro voluntario” y el congelamiento de las vacantes que surgieran de la aplicación de este procedimiento e incrementaba el aporte de los afiliados a la Caja de Servicios Sociales y a la Caja de Previsión Social. En 1992 el decreto N° 2160 estableció la bonificación del presentismo para los docentes.

¹⁵ Son los que en Santa Cruz se conocen como “trabajadores de la ley 591”, en alusión a la ley del Estatuto del personal civil de la administración pública provincial, sancionada en 1967 bajo el gobierno de facto del comodoro Carlos Raynelli.

¹⁶ APAP fue fundada en julio de 1963 y es el sindicato emblemático de los empleados de la administración central; protagonista de grandes luchas entre las que se encuentran el denominado “Gallegazo”, que concluyera con la renuncia del gobernador Comodoro Carlos Raynelli en 1971 (Cfr. Auzoberría, Miguel; Luque, Elida y Martínez, Susana; *Los '70 y la crisis política en Santa Cruz. La caída del Gobernador Raynelli*; Bs. As; Ed. Dunken; 2007) y la huelga con movilización y choque callejero con

Durante este conflicto el FGE se alineó con el gobierno centrando sus demandas en la recategorización del personal administrativo, el pase a planta permanente de los contratados¹⁷ y en la conversión de sumas no remunerativas a remunerativas sin que esto significara un incremento de los salarios básicos.

4. Surgimiento de la MUS

En el 2004 la filial Caleta Olivia de la ADOSAC se declaró en huelga por tiempo indeterminado. La crítica situación social en Caleta Olivia permitió que los docentes contaran con la adhesión de trabajadores desocupados, de planes de empleos, judiciales y personal de la sanidad, produciéndose durante el desarrollo varias movilizaciones multitudinarias, no obstante, los intentos de extender la huelga a toda la provincia no tuvieron resultados positivos para la ADOSAC. La dilación en la resolución del conflicto, el descuento de los días de huelga y del presentismo –cuyo monto constituía aproximadamente el 50% del salario–, y el procesamiento de una veintena de trabajadores, condujo al levantamiento de la medida de fuerza.

la policía provincial en mayo de 1990 que provocara el juicio político y posterior deposición del gobernador Ricardo Del Val. Cfr. Luque, Elida y otros, “Conflictos sociales...”, op. cit.

Desde 1990 comenzó un proceso de declive, sufriendo “los embates de la implementación de políticas neoliberales, que privilegiaron las privatizaciones, desjerarquizaron el empleo público hasta su total precarización mediante contratos y planes de ayuda económica” según manifestaba un comunicado de la Lista Violeta al cumplirse el 44° aniversario de la entidad sindical (*Tiempo Sur*, 28/07/07). Como manifestación de esa crisis, la APAP fue perdiendo afiliados; en plena década de los '90 de una cifra cercana a 6.000 pasó a poco más de 3000, Rafael Agullo, ex secretario general de la organización, explicaba esta reducción a partir de “la ley de retiros voluntarios (sic) no hay que olvidarse que cuando este gobierno implementó esa legislación prácticamente se fueron 2.500 empleados provinciales de los cuales la mayoría eran afiliados a nuestro gremio. Posteriormente cuando los compañeros de la granate y la violeta perdieron las últimas elecciones se encargaron de hacer renunciar a la gente que realmente los había acompañado ” y continuaba “en el año 1987 cuando yo ingresé a la conducción, la APAP tenía escasamente 2.000 afiliados y el único que elevó la cifra a 9.700 fue este secretario general conjuntamente con el resto de los compañeros”. (*El Sureño*, 14/07/97). Otra de las razones de la crisis que atraviesa APAP es el accionar de sindicatos que implementaron un proceso de afiliación de trabajadores de la administración central: UPCN, que tradicionalmente representaba los intereses de los trabajadores de entes nacionales, y ATE asociada históricamente en Santa Cruz con los trabajadores del carbón.

¹⁷ Los denominados planes PEC y PRENO fueron creados por el decreto 150/96 del gobierno provincial. Su objetivo era brindar entrenamiento ocupacional, capacitación y formación profesional a través de la promoción de proyectos de obras y servicios de utilidad pública o social. Los beneficiarios eran trabajadores desocupados, con bajas calificaciones laborales y con grupo familiar numeroso, sin distinción de sexo. La ayuda económica no remunerativa era de \$205 por beneficiario más \$80 pesos por hijo menor de 18 años que se encontrará inscripto en el sistema educativo oficial de la provincia; en caso de hijo discapacitado la ayuda ascendía a \$240. La contraprestación consistía en la realización de prácticas laborales de hasta 8 Hs. diarias durante 6 meses con posibilidad de renovación. Los beneficiarios y el grupo familiar a cargo tenían cobertura médica asistencial y seguro de vida.

En mayo del 2005, en la norteña ciudad de Pico Truncado, municipales afiliados a ATE se declararon en huelga demandando una recomposición salarial de \$300 y el pase a planta permanente del personal contratado. Con una duración de 44 días, la huelga se levantó tras la firma de un acuerdo con el gobierno justicialista del municipio, inmediatamente el intendente denunció que el acta había sido firmada bajo amenazas, tras lo cual fueron detenidos seis dirigentes sindicales bajo los cargos de coacción, privación ilegítima de la libertad y daños, además el acta-acuerdo firmada fue declarada nula por la justicia provincial.

Estos conflictos se caracterizaron por un alto grado de fragmentación en tanto que los trabajadores no pudieron articular sus acciones con un grado de unidad que les permitieran alcanzar sus objetivos económicos. Tampoco pudieron sumar a otras fracciones sociales en sus luchas, es decir que sus acciones se desarrollaron en un relativo aislamiento que les impidió formar parte de un movimiento opositor desde el campo político.

Si bien los trabajadores no pudieron satisfacer sus demandas, estas luchas llevaron a que el gobernador Sergio Acevedo comenzará a analizar la necesidad de implementar cambios con relación al empleo público¹⁸. Según fuentes periodísticas, a comienzo del 2006, el gobierno provincial se encontraba evaluando la posibilidad de introducir cambios en su política mediante la recomposición de la pirámide salarial a partir del otorgamiento de un aumento del 13% combinando aumento al básico con cifras en “negro” y el blanqueo progresivo de las cifras no remunerativas¹⁹. Esta propuesta habría sido rechazada por el presidente Kirchner que presionaba para que el aumento no fuera superior al 10% “por temor a un rebrote inflacionario”²⁰, y se otorgara en las mismas condiciones que se venían implementando desde 1991. Las diferencias entre Kirchner y Acevedo provocarán la renuncia de este último y a los pocos días de producirse²¹ el

¹⁸ Durante la gobernación de Sergio Acevedo, electo gobernador en el año 2003 por el FPV, comenzó la incorporación de planes de empleo PEC y PRENO al plantel de la administración pública y entes descentralizados. Primero en forma gradual el personal pasó a revistar en situación de contrato de locación de servicio de personal del 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2004 y a partir del 2005 pasaron a formar parte de la planta permanente.

¹⁹ <http://www.lanacion.com.ar/790164-dio-un-aumento-del-30-el-gobernador-de-santa-cruz>

²⁰ Ver: <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/64414-21230-2006-03-17.html>

²¹ La cobertura mediática de la renuncia de Sergio Acevedo a la gobernación centró su análisis en el debilitamiento de su figura tras los conflictos que atravesaba la provincia, en especial la crisis por la muerte de un oficial de la policía santacruceña, en el marco de una protesta sindical en la localidad de Las Heras. La prensa también mencionaba como factor relevante discrepancias que habrían surgido entre el gobierno provincial y nacional en torno a la obra pública; como último episodio la licitación del Gasoducto Cordillerano Santacruceño. Estas diferencias también tuvieron manifestaciones políticas

vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Carlos Sancho, anunció un incremento salarial superior al pretendido por el gobernador renunciante, consistente en una suma no remunerativa de \$300.²²

El 30 de agosto del 2006 se lleva a cabo en Río Gallegos una multitudinaria movilización, donde se exigía un aumento del salario básico para todos los empleados de la administración pública de la provincia.

En la movilización se dio lectura a un duro documento que arremetió contra la política salarial que venía implementando el gobierno provincial “desde hace quince años”, que es “cuando se invoca la emergencia económica”. En el mismo se definen como “habitantes pobres en una provincia rica que permanentemente aumenta en forma considerable sus ingresos”, además expresaban que “nos robaron un sueldo, nos robaron el aguinaldo, nos quitaron los convenios colectivos de trabajo, nos aumentaron los aportes de la Caja de Previsión Social y de la Caja de Servicios Sociales, cuyos servicios son cada vez más ineficientes”.

El documento señalaba que los reclamos sectoriales habían tenido como respuesta del gobierno “la descalificación, acompañada con actitudes despectivas, totalitarias y provocadoras hacia los trabajadores” con la finalidad de “acallar las voces de quienes resisten la política salarial y la flexibilización laboral”.²³

En este contexto se conforma la MUS, teniendo como principales exigencias la convocatoria a paritarias y el aumento del salario básico. Tras numerosas movilizaciones que contaban con una participación que rara vez superaban el centenar de manifestantes, la movilización del 30 de agosto de 2006 reunió en Río Gallegos a casi un millar de trabajadores de diferentes sindicatos de empleados estatales, quienes logran un grado de unidad no observada en Santa Cruz desde las jornadas de protesta de marzo y abril de 1990.

Los trabajadores nucleados en SOEM y en ATE protagonizaron los conflictos más importantes en el 2006. En el mes de septiembre los trabajadores municipales de

cuando en febrero del 2005 el gobernador Acevedo tuvo que dar marcha atrás en su intención de colocar como vicepresidente primero de la Cámara de Diputados provincial a un dirigente de su confianza.

²²<http://www.infobae.com/2006/03/19/244290-el-gobernador-sancho-otorga-aumento-300-el-sector-publico/>. Las desavenencias entre los gobiernos nacional y provincial en torno al monto y a las características del aumento salarial eran ante todo políticas y no respondían a la situación financiera del estado provincial. El 5 de mayo de 2009, el diario *Tiempo Sur* de Río Gallegos, publicó en su sección Carta al Director, una misiva de Sergio Acevedo, donde afirmaba que “En marzo de 2006 obraban en las cuentas públicas fondos suficientes para pagar todos los sueldos hasta fin de año con una pauta de aumento del 18%...”, el porcentaje se asemeja al finalmente otorgado a los empleados de la administración central. <http://www.tiemposur.com.ar/nota/3241-se%C3%B1or-director>

²³ *Tiempo Sur*, 31/08/006.

Río Gallegos realizaron varias huelgas reclamando mejoras salariales, en tanto que ATE adoptó diferentes medidas de fuerza, incluyendo huelgas entre septiembre y octubre que paralizaron el funcionamiento de los hospitales en toda la provincia.

5. El conflicto de 2007²⁴

En febrero de 2007 la ADOSAC se movilizó hacia la legislatura provincial en el inicio de las sesiones ordinarias, convocando además a una huelga de 48 horas coincidente con el comienzo del ciclo lectivo, mientras que los trabajadores agrupados en ATE realizaron asambleas en los hospitales de Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio, 28 de Noviembre y en la municipalidad de Las Heras, como continuidad del plan de lucha iniciado en 2006. El secretario general de ATE, Alejandro Garzón, en declaraciones reproducidas por *Tiempo Sur*, sostuvo que "...vamos a pedir una reunión con el gobierno", manifestando también que el reclamo no es solo de un sector "sino que nuestra pelea va ser multisectorial", al mencionar que poseen afiliados "en el registro civil, subsecretaría de trabajo, ministerio de economía, porteros, caja de servicios sociales y municipales"²⁵. Un sector minoritario de empleados públicos de la administración central y entes descentralizados, a pesar de que sus organizaciones sindicales pertenecían al FGE, se autoconvocaron el sábado 10 a fin de plantear reclamos; del mismo sector de trabajadores la lista violeta de la APAP exigía que la intervención de dicho sindicato se pusiera a disposición del reclamo, declarando el estado de alerta y movilización, y que convocara a un plenario de delegados provinciales. En la misma semana el gremio de los judiciales provinciales se reunió en asamblea y convocó a un congreso para el 10 de marzo con el objetivo de analizar la situación salarial y las acciones a seguir.

En el acto inaugural del ciclo escolar, el gobierno provincial anunció un aumento del 15% para el sector docente, que fue rechazado por la ADOSAC por considerarlo insuficiente y "en negro". Frente a la posibilidad de que al resto de los empleados públicos se les ofreciera una propuesta semejante, la MUS convocó a una movilización para el jueves 15 de marzo; fue la primera gran movilización de este proceso en donde

²⁴ Para la descripción del conflicto se utilizaron como fuentes los diarios: *La Opinión Austral* y *Tiempo Sur*, ambos de Río Gallegos.

²⁵ *Tiempo Sur*, 08/03/007

el reclamo se unificó y aparecieron claras las consignas que hacían hincapié en la necesidad de revertir 17 años de una política salarial que fue deteriorando el salario básico, con sumas no remunerativas y no bonificables.

Ese mismo día se realizó también una contramarcha de padres, estimulada desde el gobierno provincial, de la cual participaron funcionarios provinciales y trabajadores de la empresa Austral Construcciones.²⁶

Finalmente el 20 de marzo el gobierno otorgó el aumento salarial siguiendo las pautas aplicadas desde 1991, a la vez que anunció el descuento del presentismo y de los días de huelga a los docentes.

Al otro día la MUS concretó una huelga general además de movilizarse en Río Gallegos con la presencia de delegaciones del interior de la provincia. Esta marcha contó con mayor concurrencia que la anterior y tuvo como principal orador al Obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Juan Carlos Romanín²⁷, quien se solidarizó con el reclamo de los trabajadores al tiempo que exhortó al gobierno a habilitar el diálogo.

A partir de esta huelga con movilización, los trabajadores recibieron el abierto apoyo de los partidos opositores –UCR y FUT-PO–, organizaciones de DD HH y asociaciones profesionales²⁸. A la cuestión salarial se sumaron planteos democráticos y de transparencia de los actos de gobierno. El carácter político del conflicto, ya dado por la huelga provincial, se acentuó con la presencia de efectivos de la gendarmería

²⁶ *Tiempo Sur*, 16/03/007.

²⁷ Un artículo titulado “Un moderado de la línea de Bergoglio”, afirmaba que “La actitud del obispo se inscribe en la línea de **mayor compromiso social** que la Iglesia argentina viene asumiendo desde hace más de una década. Romanín es así fiel representante de la **ancha franja del medio** del Episcopado, hoy dominante, que encabeza el cardenal Jorge Bergoglio.” *Clarín*, 22/03/007 [en negrita en el original]. La Iglesia asumió el rol de la oposición, tal como lo explicaba en 2008 Julio Godio: “actualmente, la presencia de la Iglesia adopta tres modalidades principales: resistencia a la secularización de la sociedad, “mediadora” en los conflictos sociales y laborales, y como organizadora de movimientos políticos opositores para limitar el impulso político-hegemónico del kirchnerismo. La Iglesia ocupa el lugar que ha dejado la dispersión de la oposición política al kirchnerismo. Y se convierte en líder de la “resistencia democrática” en representación de la defensa de los “valores republicanos”. En las elecciones constituyentes de la provincia de Misiones, octubre de 2006, la Iglesia Católica fue la fuerza convocante que unió a la oposición y logró derrotar al kirchnerismo. (...). Estas operaciones políticas son inspiradas por el Cardenal Jorge Bergoglio, de la orden jesuita, que es la figura principal de la Iglesia Católica en nuestro país. (...) las relaciones entre el gobierno kirchnerista y la cúpula del Episcopado son de tensión y desconfianza...” Julio Godio y A. Robles, *Los tiempos de CFK. Entre la movilización y la institucionalidad. El desafío de organizar los mercados*, Bs As, Corregidor, 2008, pp.81/82

²⁸ La cobertura de la movilización del 20 de marzo realizada por el diario La Nación informaba sobre el acercamiento entre dirigentes de la UCR y del peronismo en el que se encontraba Eduardo Arnold dos veces vicegobernador de Kirchner, y agregaba “Todavía conmovida por los cánticos y gritos contra Kirchner y Sancho, que se oyeron en esta ciudad, la oposición sueña con dar un batacazo histórico en las elecciones de octubre próximo”, La Nación, 24/03/007.

nacional, quienes habían arribado a la ciudad de Río Gallegos en la madrugada de ese día²⁹.

En medio de cánticos como “Se va acabar, se va acabar, la dictadura provincial”; “Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, se te quema el rancho” –en alusión al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo–, los discursos de los dirigentes sindicales también rechazaron la presencia de efectivos de gendarmería nacional, denunciaron amenazas hacia trabajadores, el ataque a la filial de la ADOSAC de Puerto Santa Cruz y la quema de un automóvil propiedad del sindicato docente en Río Gallegos³⁰.

Ante la creciente conflictividad social donde docentes, personal de la sanidad y judiciales realizaban medidas de fuerzas, los funcionarios provinciales respondían con declaraciones que minimizaban la concurrencia a las movilizaciones, denunciando la complicidad de la dirigencia sindical con partidos de la oposición, en especial la UCR y el FUT-PO³¹ y afirmando además que los salarios docentes eran los más altos del país³². En una medida que acrecentó la tensión en la cual se desarrollaban los hechos, los establecimientos educativos de la ciudad capital y de varias localidades del interior amanecieron custodiados por fuerzas de seguridad nacional y provincial.

²⁹ Gendarmería nacional comenzó a tener presencia permanente en la zona norte de la provincia a partir de la ocupación, por trabajadores desocupados, de la planta de la empresa Termap (Terminales Marítimas Patagónicas) en Caleta Olivia en el 2004, Cfr. Luque, Elida y Susana Martínez, “Los trabajadores de la zona norte de Santa Cruz frente a la emergencia del movimiento de desocupados”, en Iñigo Carrera, Nicolás (Dir.), (2011), *Sindicatos y desocupados en Argentina 1930/35 – 1994/2004. Cinco estudios de caso*, Vicente López, PIMSA – Dialektik. En el 2006, en la protesta social que terminará con el asesinato de un oficial de la policía provincial su presencia se extendió a la ciudad de Las Heras, también en la zona norte, bajo los argumentos de lucha contra el narcotráfico, seguridad vial y control ambiental (Diario *Página/12*, 6/12/006).

³⁰ Hechos similares comenzaban a repetirse: en los últimos días de marzo, el secretario general de ATE-Santa Cruz, Alejandro Garzón manifestó haber recibido amenazas de muerte; el 31 de marzo se produjo un atentado anónimo con bombas molotov en un gimnasio municipal donde la ADOSAC realizaba un festival para acrecentar el fondo de huelga. En abril se denunció el secuestro del hijo de una delegada de ATE-Sanidad y otra delegada del mismo sindicato denunció la rotura de vidrios de su domicilio particular; ADOSAC Río Gallegos comunicó que un grupo de desconocidos amenazó a un auxiliar docente en su mismo domicilio; por su parte una integrante de los “Autoconvocados de la Ley 591” denunció que dos hombres la amenazaron en su domicilio.

³¹ En Río Gallegos, en al menos cuatro establecimientos educativos aparecieron pintadas en las paredes leyendas fustigando el papel de la ADOSAC, en tanto que la asimilaban con el Partido Obrero.

³² En esta misma línea, el Presidente Kirchner en un acto realizado en La Matanza sostuvo que “**No voy a aceptar la extorsión de nadie**”, al tiempo que enfatizaba que un docente santacruceño posee un sueldo de \$ 1.885 frente a los \$1040 que perciben los docentes del resto del país, con relación a la oposición dijo: “Les digo a la oposición de mi provincia y de todo el país, que quebraron al país; que tengan paciencia, que estén tranquilos que **ya va a venir octubre y el pueblo se va a venir a expresar para profundizar el cambio** y la transformación en la Argentina”, y se refirió de manera indirecta al Obispo Romanín, calificándolo como “distruido” que “llegó hace un año”, Diario *Clarín*, 22/03/007. [En negrita en el original]

A lo largo de marzo el gobierno provincial intentó frenar la conflictividad sindical recurriendo a los métodos que le habían garantizado contener los reclamos en los últimos años: descuento de haberes, contramarchas, utilización de las fuerzas de seguridad nacional y provincial, y una intensa campaña de prensa –de medios de comunicación públicos y privados. Sin embargo, con el transcurrir de los días el grado de conflictividad se intensificó, la adhesión a las huelgas iba en aumento al igual que la capacidad de movilización de la MUS.

En los primeros días de abril los principales sindicatos estatales se encontraban en pleno proceso de movilización; la situación nacional creada tras el asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén derivó en multitudinarias movilizaciones; en Puerto Deseado se realizaron dos movilizaciones donde confluyeron además de los sindicatos en conflicto, trabajadores de otros sindicatos estatales como SOEM, trabajadores de Luz y Fuerza y del SAT, también participaron gremios del sector privado como SUEPP (Sindicato Unido de Estibadores de Puertos Patagónicos) y SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina). En Río Gallegos durante la huelga general del 9 de abril, la MUS además marchó con la presencia de mineros de Río Turbio, hacia Casa de gobierno, donde los manifestantes desbordaron el cordón policial produciéndose incidentes menores con efectivos policiales. Al repudio por la muerte de Carlos Fuentealba, los manifestantes sumaron la exigencia de la renuncia del gabinete provincial.

El conflicto comenzará a producir disidencias en el partido gobernante: en el izamiento dominical³³ y frente a una importante concurrencia de docentes, el presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Raúl Cantín del FPV, manifestó compartir el reclamo de los docentes por considerarlo legítimo; se sumaba así a lo expresado por otros dirigentes del oficialismo³⁴. Como manera de profundizar las disensiones en el partido gobernante y sus funcionarios, ADOSAC comenzó a presionar en los Concejos Deliberantes para que emitieran resoluciones solicitando al gobierno provincial habilitar

³³ El izamiento dominical es una celebración de carácter patriótica que se realiza a lo largo de todo el año en Río Gallegos y que es organizada por la intendencia; en el mástil ubicado en el centro de la ciudad se dan cita semanalmente funcionarios públicos municipales, fuerzas vivas y las cúpulas de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con asiento en la ciudad. Esta celebración comenzó a realizarse durante el conflicto límite con Chile en 1978.

³⁴ El concejal del PJ de Puerto Deseado, Jorge Navarro manifestó: “Estoy cansado de aguantar a estos pseudo – peronistas... Lo que están haciendo es una cosa nefasta, es un Gobierno provincial autista”. En tanto que “El diputado provincial Osvaldo Pérez manifestó en la radio FM Dimensión que es un momento de debate social, que puede haber otra salida, es decir la de una tercera mirada, que es la del diálogo donde se pueden encontrar soluciones”. *Tiempo Sur*, 24/03/007.

una mesa de diálogo, avanzar en la convocatoria a paritarias y en la derogación de la emergencia económica; la entidad sindical logró conseguir este objetivo en las localidades de Puerto San Julián, Río Turbio, Puerto Deseado y Los Antiguos.

Dentro del bloque justicialista de la Cámara de Diputados provincial un grupo de diputados disidentes presentaron un proyecto que derogaba los artículos de la ley de emergencia económica que impedían la convocatoria a paritarias. La sesión del 12 de abril se realizó con gradas ocupadas por una gran cantidad de trabajadores que insultaban permanentemente a los diputados oficialistas. Frente a esta situación el bloque oficialista decidió abandonar el recinto sin dar tratamiento al proyecto por lo cual la sesión se levantó por falta de quórum; tras el abrupto final dirigentes sindicales de SOEM, ATE, APEL y Judiciales tomaron el recinto legislativo donde permanecieron hasta el día siguiente, mientras que trabajadores se concentraron en el ingreso a la legislatura durante toda la noche; los sindicalistas recién abandonaron el edificio al ser notificados de una denuncia penal en su contra. Tras la ocupación de la Cámara de Diputados, el ministro de gobierno, Daniel Varizat, calificó a los dirigentes sindicales como “patoteros disfrazados de sindicalistas”³⁵.

Frente a un panorama cada vez más complejo el gobierno provincial alertaba, sin mayores fundamentos, a la población de la presencia de grupos extremistas, en clara alusión a la organización Quebracho, quien por esos días ocupaba los titulares de los medios nacionales por el ataque a la Casa de Neuquén en Capital Federal.³⁶

El jueves 19 se llevó a cabo una nueva huelga con movilización convocada por la MUS, con una participación que superó ampliamente a las anteriores, los manifestantes se dirigieron hacia Casa de gobierno fuertemente custodiada por efectivos de la policía provincial y de gendarmería³⁷. Para apaciguar el ánimo de los huelguistas,

³⁵ *Tiempo Sur*, 14/04/007

³⁶ Comunicado de la Dirección Provincial de Prensa de la provincia: “Ante los distintos actos de violencia que se han producido en esta ciudad capital, el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Cruz recomienda a la población arbitre las medidas precautorias para que estos grupos **extremistas**—cuya presencia fuera oportunamente denunciada por integrantes de la Mesa de Unidad Sindical ante el Fiscal de Turno—, no dañen la integridad física de los vecinos de nuestra comunidad. En este sentido, se recuerda que hechos como la toma de edificios públicos —Legislatura Provincial—, establecimientos educativos, quema de vehículos, amenazas contra domicilios y vehículos de funcionarios públicos, atentados tanto contra docentes que decidieron dictar clases como así también a trabajadores de la administración Pública Provincial que desean desarrollar sus tareas en forma normal, no se condicen con el espíritu de lucha y trabajo al que está acostumbrado el pueblo santacruceño. Por esta razón, se recomienda a la población que desee acompañar las diversas manifestaciones que se sucedan en la ciudad a que en el caso de observar personas que inciten a realizar actos de violencia, se aparten de manera que no se dañe la integridad física ni de niños ni adultos.”, *Tiempo Sur*, 19/04/007. [En negritas en el original]

³⁷ La presencia de Gendarmería Nacional fue incrementándose en el transcurso del conflicto, la crónica periodística informaba que hacia finales de abril la dotación de la gendarmería nacional en Río Gallegos

que pretendían romper el cordón policial, se instaló una carpa que al transcurrir los días será conocida como “Carpa de la dignidad”. Al otro día, los intendentes pertenecientes al FPV³⁸ y los comisionados de fomento, exhortaron a la ADOSAC –que esa semana se declaraba en huelga por 96 horas– a deponer las medidas de fuerza, mediante una solicitada publicada en los diarios riogalleguenses; era un vano intento de mostrar cohesión en un contexto donde cada vez más dirigentes y figuras destacadas del justicialismo hacían públicas sus diferencias, entre otros, el exgobernador Jorge Cepernic³⁹.

La instalación de la “Carpa de la dignidad” frente a Casa de gobierno cobra relevancia dado que en cuestión de días toda una cuadra se verá colmada de carpas de los distintos gremios de la MUS, agrupaciones sindicales, estudiantes secundarios e incluso esposas de policías. Se convirtió en lugar de concentración y de asamblea permanente de sectores sindicales y de la oposición política, punto de referencia para el inicio y la finalización de las movilizaciones que se realizaron de ahí en más. Se constituyó asimismo en un piquete que interrumpió el tránsito durante meses, mantenido por los trabajadores en turnos rotativos; y era el lugar al cual se dirigían las donaciones al fondo de huelga realizadas por comerciantes, profesionales y trabajadores del sector privado. Un apoyo importante brindó la intendencia de Río Gallegos, en ese entonces en manos de la UCR, que dispuso la instalación de carpas y baños químicos.

El sábado 21 fueron instaladas vallas de seguridad en la Casa de gobierno y la legislatura provincial. A su vez ese día medios gráficos publicaron una solicitada del gremio judicial contra la Subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, Elsa Capuchinelli –en otros tiempos dirigente gremial de los judiciales provinciales–; por la tarde la funcionaria dictó la conciliación obligatoria lo que motivó su desplazamiento del cargo por considerarse que había tomado la medida de manera inconsulta. A las pocas horas y tras conocerse la noticia se produjo un cacerolazo espontáneo, que según las crónicas periodísticas reunió a 6000 manifestantes, quienes recorrían el centro de la capital

se había incrementado en 200 efectivos más que fueron alojados en las instalaciones de la Sociedad Rural de Río Gallegos, allí también se depositaron elementos antimotín: cascos, escudos, etc. <http://www.lagaceta.com.ar/nota/215563/argentina/gendarmeria-nacional-descargo-armamento-santa-cruz.html>.

³⁸ La provincia de Santa Cruz contaba en 2007 con 14 municipios y 5 comisiones de fomento, 12 intendentes pertenecían al FPV y 2 a la UCR: Héctor Roquel en Río Gallegos y José Martinelli de Las Heras.

³⁹ Jorge Cepernic: gobernador de la provincia entre 1973–1974, en la avanzada del peronismo ortodoxo contra los gobernadores ligados a la llamada “Tendencia Revolucionaria”, el gobierno de María Estela Martínez de Perón intervino la provincial interrumpiendo su mandato.

provincial al grito de “Que se vayan todos”, finalizando la manifestación en la “Carpa de la dignidad”. El domingo, con mayor convocatoria, se produjo otro cacerolazo.

En esos días los periódicos de la capital provincial reprodujeron trascendidos acerca de que el interventor de YCRT, Daniel Peralta, se había reunido con el presidente Kirchner para analizar la situación social. A partir de allí empezó a correr el rumor de que Peralta reemplazaría a Carlos Sancho al frente de la gobernación⁴⁰.

El miércoles 25 el gobierno provincial a través del Frente de Gremios Estatales dio a conocer un paquete de medidas consistente en el pase de sumas no remunerativas a remunerativas pero sin modificar el salario básico, además se comprometía a la recategorización de los trabajadores de la administración central –el de mayor cantidad de trabajadores–. Esta medida tenía como finalidad evitar que el resto de los sindicatos de empleados estatales se sumaran a las medidas de fuerza, buscando aislar de ese modo a los sindicatos en conflicto. Ese mismo día la ADOSAC fue convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación a una mesa de diálogo integrada por el gobierno provincial, ADOSAC, CTERA y los ministerios de Educación y Trabajo de la Nación; así la resolución del conflicto docente se trasladaba de la órbita provincial a la nacional. Esta mesa de diálogo funcionó a pesar de la negativa de la ADOSAC a suspender la huelga, de hecho se encontraba en paro por tiempo indeterminado desde el 16 de abril y que se prolongó hasta el 24 de mayo.

Durante esa semana se publicaron varias solicitadas, una de ellas firmada por UOCRA-Seccional Santa Cruz llamaba a los docentes y al gobierno a entablar diálogo, también sectores empresariales publicaron solicitadas: la Cámara de Comercio e Industrias Afines de Río Gallegos reclamó el restablecimiento del servicio educativo, en tanto que un grupo de empresas le solicitaron a la ADOSAC la suspensión de las medidas de fuerza.⁴¹

⁴⁰ En el 2006 también trascendidos periodísticos señalaron a Daniel Peralta como sucesor de Sergio Acevedo. <http://www.diario26.com/10710--cronica-de-una-renuncia-anunciada> y <http://www.enernews.com/nota/187016/sergio-acevedo-la-segunda-victima-de-las-heras>.

⁴¹ Estas son: Cámara de servicios mineros de Santa Cruz / Cámara de la construcción Zona Norte / Asociación flota amarilla de la Pcia, de Sta. Cruz / SEAVE. S.A. / Cámara de transporte (CACYLCRUZ) / EMPASA S.A. / Barilari S.A. / Conarpesa S.A. / Compañía pesquera del Sur S.R.L / Fishing World S.A. / U.T.E. Cañadón Seco Transpetrol Sur S.R.L., Ingenierías de Obras, Prosepet S.A., Lercó S.A. / Cámara de servicios del Golfo San Jorge / C.A.La.Pa (Cámara Argentina Langostinera Patagónica) / MOBERLY S.A. / LB SUR S.A. / Servicios V.A.S.A / MG Construcciones / San Jorge Construcciones / Constructora Civil y Servicios Generales / AB Construcciones / Araujo Construcciones / Valdivia Construcciones BRB S.R.L / Arispe Hnos. Construcciones / Merlo Construcciones / T.T.P S.A / Artesanos del Mar S.A / EDER S.A / Otamendi y Cía. S.R.L

El jueves 26 con los sindicatos de la MUS en huelga y movilizados, la legislatura provincial envió a comisiones el proyecto de ley de paritarias presentado por los diputados del “grupo de los siete”⁴²; hecho que motivó que los manifestantes respondieran con insultos, huevazos y golpes a los legisladores que informaron la situación. A la espera de la salida de los diputados oficialistas, grupos de trabajadores rodearon las instalaciones de la Cámara de Diputados e impidieron durante varias horas el egreso de las personas que se encontraban allí; los diputados del FPV y el personal legislativo recién pudieron abandonar el edificio en horas de la madrugada acompañados por efectivos de gendarmería nacional.

En este marco de conflictividad protagonizado por los sindicatos integrantes de la MUS, cobró especial significación el acto por el Día del Trabajador que se conmemoró en la “Carpa de la dignidad” con la presencia de sectores gremiales del ámbito local y nacional, de Derechos Humanos y de autoridades, entre ellas el intendente Héctor Roquel (UCR) y el obispo Juan Carlos Romanín. Actos semejantes se realizaron en casi todas las localidades de la provincia.

También el 1° de mayo fue ocupado por unas horas el edificio de la Subsecretaría de Trabajo por afiliados de ATE de la cartera laboral y de sanidad, como respuesta a los descuentos que sufrieran en sus haberes cerca de 200 empleados que adhirieron a las huelgas del mes de abril. Los trabajadores hospitalarios nucleados en ATE se encontraban en huelga por 48 horas y ya llevaban dos meses de constantes reclamos ante el Ministerio de Asuntos Sociales.

Frente al rechazo sindical de elevar en \$50 el salario básico de los docentes, el Ministerio de Trabajo nacional dictó la conciliación obligatoria que no fue acatada por el sindicato docente. La noche del 7 de mayo, docentes acompañados por trabajadores públicos de otros sectores, marcharon por el centro de la ciudad en apoyo al Obispo Juan Carlos Romanín, quien había sido duramente cuestionado por el ministro Varizat. Esa noche se produjeron incidentes entre manifestantes y efectivos de la gendarmería nacional frente a los domicilios particulares del presidente Kirchner y del ministro de gobierno Varizat en Río Gallegos; en los mismos hubo manifestantes y efectivos de seguridad con heridas leves. Desde el gobierno se señaló que los manifestantes

⁴² Se denominaba como “grupo de los siete” a diputados disidentes del FPV que habían presentado el 24 de abril un proyecto de ley para convocar a paritarias del sector público provincial, el mismo debía ser tratado sobre tablas en la próxima sesión ordinaria. eran: Jorge González, Osvaldo Pérez, Carlos Figueroa, Adrián Suárez, Nieves Beroiza, Clara Ruiz y Carlos Suárez, algunos de ellos eran dirigentes cercanos al exgobernador Sergio Acevedo.

intentaron provocar a las fuerzas de seguridad para luego difundir en los medios nacionales que había represión en Santa Cruz. El clima de tensión siguió en aumento cuando en horas de la madrugada se produjeron atentados anónimos en las instalaciones del Comité provincial de la UCR y en la sede de la ADOSAC.

Como consecuencia de estos incidentes, se realizó el 8 de mayo una nueva movilización y acto con varios oradores en repudio a la represión. Más de seis mil personas marcharon exigiendo la renuncia del vicegobernador Sancho y de todo su gabinete. Participó la Asociación de Abogados de la ciudad que emitió un comunicado anunciando el pedido de juicio político contra el vicegobernador Carlos Sancho y solicitando que se adelantasen las elecciones. Otros oradores fueron representantes de los gremios de la MUS y del Obispo. El acto se planteó como un “cabildo abierto”; fue el abogado Bernardino Zafranni quien acusó al presidente Kirchner de absolutista y de que la Nación ha quitado la soberanía provincial: “En Santa Cruz hemos perdido el miedo en el que vivimos por más de 15 años. Le hemos dicho basta. No tenemos más miedo”.

Al día siguiente, 9 de mayo, se publicó una solicitada de la Mesa de Unidad Sindical, criticando la represión hacia los trabajadores por parte de “las fuerzas de choque de la policía provincial y Gendarmería”. En uno de sus párrafos dice: “¿Que hace falta para que las autoridades provinciales entiendan que lo que comenzó con un reclamo gremial de una parte muy importante del pueblo santacruceño de aumento salarial al básico de acuerdo al costo de la canasta familiar en Santa Cruz y blanqueo de las sumas pagadas en negro, se ha convertido en un reclamo social de una parte muy importante del pueblo santacruceño que decidió plantarse firme reclamando se reconozca su dignidad después de la opresión de tantos años?”. La extensa solicitada hacía referencia asimismo a la corrupción, en particular en el manejo de las obras públicas, la falta de independencia de los poderes del estado en la provincia, y se plasmó como uno de los reclamos principales de la MUS, la derogación de la ley de emergencia económica, “que constituye la traba más importante para la discusión salarial”.

Mientras que los diarios reflejaban los acontecimientos ocurridos el día anterior, la mañana del 9 de mayo se produce el hecho que finalmente desencadenó la renuncia del vicegobernador Carlos Sancho; encabezada por la flota de maquinaria pesada del municipio, una marcha de los trabajadores municipales riogalleguenses que ese día

concretaban una huelga por 24 horas, fue reprimida por la policía provincial. La crónica periodística informó que “Veinte empleados municipales resultaron heridos ayer luego de ser emboscados por la Policía de Santa Cruz, cuyos efectivos dispararon con gases lacrimógenos y balas de goma durante una movilización”⁴³. La intención del SOEM Río Gallegos, era entregar un petitorio a las autoridades municipales y concejales reiterando su reclamo de pase al básico de las sumas remunerativas, y de allí dirigirse hacia Casa de gobierno para proceder a la entrega de una copia del petitorio. Además se denunciaba al gobierno provincial por retacear fondos al municipio para el pago de los sueldos. Este hecho señaló el ingreso del SOEM al conflicto con reclamos propios; hasta ese momento participaba de las marchas que realizaba la MUS pero con escaso grado de movilización.

Aunque su protesta era por motivos salariales, el SOEM dirigió sus demandas hacia el gobierno provincial, a quien acusaba de incumplir un acuerdo entre provincia y municipio, y no hacia su patronal, la intendencia de Río Gallegos –en manos de la UCR–, que había gobernado durante tres períodos desde 1991 implementando las mismas políticas salariales que el gobierno provincial⁴⁴.

Los municipales de Río Gallegos fueron los únicos en toda la provincia que tuvieron participación activa en el conflicto y esto provocó un enfrentamiento con la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Cruz (FETRAM) que inclusive llevó a que la dirigencia del SOEM de Río Gallegos analizara la posibilidad de dejar de pertenecer a la CGT regional para integrarse a la CTA, hecho que finalmente no ocurrió; además la participación de los municipales riogalleguenses se enmarcaba en la disputa que la oposición radical que administraba el municipio capitalino mantenía con el gobierno provincial.

Minutos después de la represión policial se realizó una movilización en el centro riogalleguense de 1500 trabajadores municipales, de la que participó el intendente Héctor Roquel (UCR) y el presidente del Concejo Deliberante Raúl Cantín (FPV), quienes trataron de apaciguar los ánimos de los trabajadores. Desde allí se dirigieron al Obispado, donde monseñor Romanín dialogó con los manifestantes; luego marcharon hasta la fiscalía en turno, donde presentaron una denuncia por la represión sufrida. La UCR y la Iglesia se mostraron como garantes de la “paz social” llamando a los

⁴³ *Tiempo Sur*, 10/05/007

⁴⁴ En 1991, Alfredo Martínez (UCR) asumió la intendencia de la capital provincial y luego fue reelecto en 1995. Héctor Roquel (UCR) ejerció la intendencia de Río Gallegos desde 2003 hasta el 2011.

trabajadores a desistir en su intento de movilizarse contra el gobierno provincial para evitar mayores incidentes.

La refriega provocó que más de una veintena de trabajadores fueran atendidos en centros de salud públicos y privados, y uno de los trabajadores sufrió la amputación de tres dedos, los trascendidos periodísticos dieron cuenta de que fue a causa de un disparo de arma de fuego, hecho negado por funcionarios provinciales quienes afirmaron que la herida había sido autoinfringida.

Por la noche se realizó una marcha de la que participaron aproximadamente 10.000 personas en repudio a la violenta represión policial, exigiendo la renuncia del Jefe de Policía Wilfredo Roque⁴⁵ y juicio político al vicegobernador Sancho y al ministro Varizat.

Dice la crónica periodística que una de las particularidades de esta nueva jornada de protesta, fue la gran participación de distintos sectores comerciales, que ante un pedido de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes, y a manera de repudio y muestra de solidaridad por “los lamentables hechos acontecidos”, invitó al cierre temprano de los comercios para participar de la manifestación.

Finalmente, al día siguiente, el vicegobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho, renunció a su cargo en medio de la profunda crisis social que atravesaba la provincia. Su reemplazante será Daniel Peralta⁴⁶, cuestión que se habría definido “en un rápido trámite a nivel del Gobierno nacional”⁴⁷. Inmediatamente prometió llamar a paritarias, uno de los reclamos centrales de los gremios en conflicto. En el acto de juramento estuvieron presentes funcionarios nacionales del FPV y también dirigentes de la UCR santacruceña, cuyos diputados votaron a favor del nombramiento.

De esta forma los cuadros políticos de la burguesía cerraron filas y la resolución del conflicto gobierno-oposición se difería para las elecciones de octubre.

⁴⁵ Wilfredo Roque fue Jefe de la Policía de Santa Cruz en todas las gobernaciones de Néstor Kirchner, renunció al cargo en noviembre de 2003 previo a la asunción de Sergio Acevedo como gobernador. Al poco tiempo fue designado responsable de la delegación de la SIDE en la provincia. Tras los acontecimientos ocurridos en Las Heras en febrero de 2006, donde fuera asesinado un oficial de la policía provincial, fue nuevamente nombrado Jefe de Policía. *Diario Página/12*, 20/08/007.

⁴⁶ Daniel Peralta, dirigente justicialista de extracción sindical. Secretario general del gremio de los bancarios cuando se inició el proceso de privatización del Banco de la Provincia de Santa Cruz, luego ocupó el cargo de Subsecretario de Trabajo de la provincia y en el 2004 fue designado interventor de YCRT tras la muerte de 14 mineros en Río Turbio. Para poder hacerse cargo de la gobernación tuvo que reasumir el día anterior a su banca de diputado provincial y ser elegido vicepresidente primero de la legislatura, previa renuncia de Judith Fortsmann a ese cargo.

⁴⁷ *Tiempo Sur*, 11/05/007.

El gremio docente publicó una extensa solicitada dirigida al recién asumido gobernador Peralta, donde señala: "...ratificamos nuestras demandas y reivindicaciones en lo atinente a: aumento del básico que hoy sigue siendo el más bajo del país (\$161,10), el blanqueo de las sumas remunerativas y no bonificables (en negro), concursos y titularizaciones acordes con el Estatuto docente. En este escenario exigimos: -Urgente solución del conflicto salarial; -Derogación de la Ley de Emergencia y constitución de paritarias; -Inmediata desmilitarización de la provincia; -Restitución de la autonomía a los Poderes legislativo, ejecutivo y judicial; -Libertad de prensa y expresión; - Democratización de los medios públicos de comunicación; -Garantía plena para peticionar y movilizarnos; -Respeto para el que disiente u opina distinto; Juicio y castigo a los responsables de la represión sufrida por los trabajadores de Santa Cruz...."⁴⁸.

Al momento de la jura del gobernador, la MUS realizaba una concentración⁴⁹ de la que participaron delegaciones de toda la provincia, el hecho de hacerla en el centro de la ciudad y no en la "Carpa de la dignidad", constituía un "voto de confianza" de la dirigencia sindical hacia Peralta; sin embargo antes del cierre de la lista de oradores la mayor parte de la multitud se dirigió hacia la Casa de gobierno, una vez allí los manifestantes comenzaron a golpear el vallado perimetral exigiendo respuestas inmediatas. Los diarios locales informaron que se trató de "la convocatoria más grande de la historia gremial de Santa Cruz": "Más de 15 mil personas pidieron soluciones 'urgentes' al nuevo gobierno y demandaron la renuncia del gabinete que acompañó a Carlos Sancho. Además, exigieron 'juicio y castigo' a los culpables de la represión".⁵⁰

Pocos días después los dirigentes de la MUS declararon que esperaban de Peralta una respuesta concreta: "creemos que tiene que venir con una solución inmediata... y además sabe cómo se resuelve el conflicto en Santa Cruz. Esto se resuelve con plata, ni más ni menos", sostuvo Ezequiel Pérez de APEL.

En medio de la convulsión social que se vivía en la ciudad capital de la provincia, con el conflicto docente sin destrabarse y reclamos de otros gremios de trabajadores estatales, el 13 de mayo ocurrió otro hecho que alcanzó repercusión nacional: la entonces Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, fue

⁴⁸ *Ibíd*em

⁴⁹ ATE-Nacional convocó ese día también a una huelga nacional, exigiendo aumento salarial para todos los empleados públicos del país, la creación del Fondo Nacional del Salario y el retiro inmediato de la gendarmería nacional de Santa Cruz. *Página/12*, 10/05/007.

⁵⁰ *Tiempo Sur*, 11/05/007.

escrachada por un grupo de docentes al salir de un restaurante; intentó llegar hasta su casa caminando pero se vio obligada a abordar un camioneta debido a los insultos, escupitajos y huevos que le lanzaban los manifestantes.

Durante el fin de semana Peralta se reunió con el obispo Romanín; el vicario Carlos Ángel en declaraciones a la prensa se mostró confiado en la capacidad del gobernador para resolver el conflicto. Peralta también se reunió con el intendente Roquel, gesto bien recibido por el radicalismo. Lo mismo hizo con la dirigencia de la MUS que reconocía haberse reunido con el gobernador, con la ausencia de dirigentes de la ADOSAC, sin aclarar el porqué del secreto que rodeó a la misma.

Así en la primera semana de gobierno, Peralta logró bajar el grado de conflictividad social y aunque ningún sindicato había alcanzado acuerdo alguno, la MUS no convocó a movilizaciones hasta el 25 de mayo cuando la resolución del conflicto docente era inminente.

Parecía comenzar a desarticularse la alianza que había conformado la MUS, con la Iglesia, los partidos opositores y sectores de la pequeña burguesía no asalariada. Pese al acercamiento del gobierno provincial con algunos dirigentes sindicales de la MUS, ATE, ADOSAC y SOEM de Río Gallegos se mantenían en huelga exigiendo del gobierno celeridad en cuanto a los anuncios salariales.

El 16 de mayo, el gobierno de Santa Cruz ofreció a los docentes llevar el salario básico del sector a 500 pesos mensuales; la nueva oferta consistía en la incorporación de sumas adicionales no remunerativas al básico, aunque el principal punto de discusión era el modo en que se llevaría adelante esa reestructuración salarial. La propuesta no satisfacía las demandas iniciales del sindicato, por lo que el debate en las distintas asambleas de las filiales se prolongó durante una semana y media.

Sin embargo, la conducción del gremio evidenciaba la decisión de levantar la huelga; una mesa de negociación en el ámbito provincial, resolvería temas pendientes como devolución de los días caídos del mes de marzo, derogación del presentismo y reestructuración de los salarios.

En el transcurso de esa semana los gremios siguieron movilizados: ATE realizó un piquete frente al Hospital Regional en Río Gallegos, ADOSAC cortes en las principales rutas de la provincia y SOEM Río Gallegos marchó exigiendo justicia. La MUS le demandaba al gobierno que hiciera extensivas las condiciones salariales otorgadas a los docentes, a todos los trabajadores provinciales. La ADOSAC

garantizaba a su vez el acompañamiento a los otros sindicatos en caso del levantamiento de las medidas de fuerza por parte del sector docente.

La unidad en la acción que había caracterizado a la MUS no significaba la búsqueda de un acuerdo en conjunto; más bien desde la asunción de Peralta se imponía la decisión por parte de los secretarios generales de que cada organización gremial negociara por separado con el gobierno.

El 25 de mayo se realizó la “marcha celeste y blanca” con una convocatoria de 4000 manifestantes. Al día siguiente el congreso provincial de la ADOSAC resolvió aceptar la propuesta del gobierno provincial.

Obligado por la presión de los sindicatos en conflicto, el gobernador Peralta anunció el envío a la legislatura del proyecto para abrir las convenciones colectivas que abarcaría a todo el personal dependiente del estado provincial. Durante casi un mes la Cámara de Diputados debatió en comisiones, con participación de las organizaciones sindicales, distintos proyectos de paritarias y otro tema sensible para la provincia: la extensión de los contratos petroleros con la empresa Pan American Energy (PAE)⁵¹.

La prensa escrita reflejó el malestar que provocaba en Santa Cruz la renegociación de los contratos petroleros, inclusive de los diputados disidentes del FPV, quienes se habrían enterado por información de diarios chubutenses. La restitución de las áreas privatizadas en los '90 estaba prevista a medida que fueran finalizando las concesiones, es decir, entre 2015 y 2017, momento en que volverían a los estados provinciales⁵². Los legisladores disidentes se oponían a que la renegociación siguiera las pautas implementadas en Chubut⁵³, por no responder a los intereses provinciales en cuanto al tema regalías, ambiente, recursos humanos y reparación histórica. Osvaldo Pérez, diputado por el pueblo⁵⁴ de Pico Truncado, hacía referencia a que la mitad de los

⁵¹ Pan American Energy, socia de British Petroleum, controlaba el 60% mientras BRIDAS-Grupo Bulgheroni- controlaba el 40%. La PAE era, en ese momento, la 2º productora de hidrocarburos en Argentina, con el 16% del petróleo y 13,4% del gas (Cfr. *El Patagónico*, 28/04/007). La producción de la PAE representaba el 12% de toda la producción provincial. En términos de regalías, aportaba el 13% de las que percibía la provincia.

⁵² *Tiempo Sur*, 04/05/007

⁵³ El gobierno de Chubut había acordado el 27 de abril la renegociación con la PAE de la extensión de concesiones petroleras. Una de las condiciones impuestas por la PAE era que el acuerdo alcanzado solo sería efectivo de producirse también la prórroga de la concesión petrolera en Santa Cruz; asimismo, el gobierno nacional también intervenía en esta renegociación dado que imponía a la PAE la condición de retirar la demanda realizada por esta empresa ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), tribunal del Banco Mundial.

⁵⁴ A partir de la reforma de la constitución provincial de 1998, la Cámara de Diputados de Santa Cruz se conforma mediante un sistema mixto, 10 diputados se eligen en distrito único y 14 son electos a razón de uno por municipio (diputado por pueblo), la Cámara se renueva en su totalidad cada 4 años en coincidencia con la elección de gobernador e intendentes. La aplicación de este procedimiento le permitió

ingresos provinciales correspondían a las regalías y que por eso debían ser el punto central de toda negociación. Es así que solicitó un pedido de informes alegando la falta de garantías jurídicas para firmar esos contratos⁵⁵.

A pesar de las discrepancias el Acuerdo de prórroga⁵⁶ con la PAE referido a las concesiones de los tres yacimientos del área Cerro Dragón⁵⁷ se firmó el 26 de junio de 2007. El gobernador envió el acuerdo a la legislatura como forma de otorgarle mayor legitimidad, a pesar de que, conforme la ley promulgada en noviembre de 2004 bajo el gobierno de Sergio Acevedo, el poder ejecutivo estaba facultado como autoridad para otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación.

Finalizado el mes de mayo –el más álgido del conflicto– el diario *Tiempo Sur* rescató la columna de opinión del periodista Eduardo Aliverti en *Página/12*, que se preguntaba: “... ¿Quién podía anticipar...que Kirchner no tendría ni una mínima parte de la muñeca suficiente para evitar la eclosión de Río Gallegos, cuando, además, no fueron acontecimientos repentinos sino progresivos? ¿Cómo pudo ser capaz de no querer (porque fue eso, no quiso) frenar un reclamo que nació en la recurrente y elemental pretensión de querer aumentar el insultante sueldo básico de los empleados públicos santacruceños? ¿Cómo se equivocó así, conociendo él, mejor que nadie, los perfiles combativos de la conducción del gremio docente provincial? ¿Cómo permitió que Santa Cruz quedara en manos de un autista? Y en todo caso y justamente frente al

al FPV gozar de una mayoría casi absoluta hasta el 2015, en el período 2003-2007 de los 24 diputados 22 conformaban el bloque del FPV y 2 pertenecían a la UCR.

⁵⁵ El proceso de negociación de las áreas “revertidas” había comenzado a fines de 2006. En marzo de 2007, sólo 15 empresas calificaron para las áreas, de las cuales 14 sobre un total de 15, quedaron en manos de dos grupos económicos: Oil M & S de Cristóbal López y Misahary Epsur de Lázaro Báez.

⁵⁶ Estos acuerdos de prórroga de concesiones petroleras se firmaron de acuerdo a lo establecido ley nacional N° 26197 de 2006 denominada “Ley Corta” que transfirió a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito (diario *Página/12*, 23/11/06). El Acuerdo de prórroga abarcaba el período 2017-2027 con una garantía de extenderlo por 20 años más.

⁵⁷ Cerro Dragón, es el yacimiento de petróleo y gas más grande del país, con una extensión de casi 3.500Km² distribuidos entre Chubut y Santa Cruz (Diario *El Cronista*, 26/11/014). Contiene la mayor parte de las reservas de crudo y gas que posee la PAE en Argentina y producía en el 2007 el 17% de la totalidad de petróleo que se producía en el país (recuperado de: <http://revistapetroquimica.com/cerro-dragon-cuales-son-las-claves-del-mayor-yacimiento-petrolero-del-pais-2/>). La explotación del yacimiento comenzó en 1957, cuando el estado nacional le otorgó la concesión a YPF por 25 años. El gobierno de Frondizi firmó un contrato de explotación con la Pan American Argentina Oil Co., propiedad de la Amoco (Standard Oil); los cambios en la política petrolera introducidos por Arturo Illía, no modificaron el estatus legal del yacimiento, aunque le fue prohibida a la empresa la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros. El gobierno de la “Revolución Argentina” extendió la concesión hasta 1993. En 1992 el contrato se convirtió en concesión hasta el 2017. De no modificarse esta situación, cuando los acuerdos de prórroga firmados por Chubut y Santa Cruz lleguen a su término, la Amoco – fusionada desde 1998 con la Bristish Petroleum– habrá explotado el yacimiento durante 100 años ininterrumpidos (Revista Industrializar Argentina, N°7, Bs As, diciembre de 2007, <http://www.indargen.com.ar/pg/num7.htm>).

tono progresivo de la protesta ¿Cómo no decidió retrancar cuando empezó a percibirse que las cosas se saldrían de madre? ¿Todo esto para terminar descongelando las paritarias y ofertando un básico de 500 pesos en una de las provincias más ricas del país, con un habitante por kilómetro cuadrado? ¿Por qué hizo falta esperar y provocar así?... Esta asombrosa actitud presidencial debe ser previa a los señalamientos sobre la ‘politización’ del conflicto en Santa Cruz. Porque es obvio que hay intereses electorales y sectoriales en el crecimiento de la puja salarial... Pero era obvio que la Casa Rosada funcionaría ajena a la realidad con un desparpajo atizador del fuego⁵⁸.

Por su parte el SOEM continuaba la huelga por tiempo indeterminado, pero mostraba importantes divisiones observables en: la elección de una comisión de lucha que le restaba poder de decisión a la conducción gremial y la agresión sufrida por el secretario general, luego de un escrache por parte de trabajadores municipales⁵⁹; el 13 se decidió levantar las medidas de fuerza en una asamblea calificada por una agrupación interna como ilegal.

A partir de este momento los conflictos suscitados serán sectoriales donde se entremezclan las exigencias salariales, los pedidos de justicia frente al accionar policial y la defensa de los recursos naturales ante la prórroga de las concesiones petroleras⁶⁰. Todos estos conflictos tuvieron escaso grado de adhesión y movilización.

El 19 de junio comienzan a retirarse parcialmente las vallas que circundaban la Casa de gobierno, mientras se desarrollaba una marcha de un grupo de ciudadanos, según la información periodística, en señal de acompañamiento a la decisión gubernamental.

En agosto el conflicto se reavivó debido a que solamente los docentes habían obtenido parte de sus exigencias, en tanto que el resto de los trabajadores no habían recibido ninguna mejora salarial. Los trabajadores de la justicia provincial declararon una huelga de 24 horas demandando el “blanqueo salarial”, ATE se movilizó en pos de un aumento de emergencia para los trabajadores de la Administración central a cuenta de lo que se resolviera en paritarias que aún no se concretaban. Por ello la MUS

⁵⁸ *Tiempo Sur*, 15/05/007

⁵⁹ Fue a raíz de haber sido sorprendido manteniendo una reunión en una confitería céntrica con el concejal del FPV, Esteban Miháinovich.

⁶⁰ ADOSAC y ATE junto a organizaciones ambientalistas y partidos políticos opositores conformaron una multisectorial que convocó a la Marcha provincial en defensa de los recursos naturales que se realizó el 9 de julio, en tanto que la CTA presentó un proyecto de ley de consulta popular, acompañado por 12.000 firmas que fue enviado a comisiones. El acuerdo con la PAE fue ratificado por la Cámara de Diputados los primeros días de agosto.

convocó a una movilización a fin de exigir el inicio inmediato de las paritarias y en apoyo a ATE que luchaba por el otorgamiento de aumento de emergencia.

La movilización se programó para el viernes 17, día en el que el FPV presentaba sus candidatos a la gobernación y presidencia, dando inicio a la campaña electoral postergada por el reclamo sindical. Los dirigentes de la MUS, en declaraciones a la prensa, afirmaron que la marcha convocada tenía un objetivo sindical rechazando cualquier connotación política que se le pudiera otorgar. Minutos después de esta conferencia, el gobierno dio a conocer el decreto convocando a los gremios a paritarias.

En el transcurso de la movilización, el exministro de gobierno, Daniel Varizat, fue escrachado por trabajadores y a modo de evadirse de tal situación dio marcha a su camioneta atropellando a los manifestantes con el resultado de 17 heridos, dos de ellos de gravedad. Tras su fuga el exfuncionario se dirigió hacia la seccional 1° de la policía provincial a efectos de denunciar a los manifestantes por amenazas e intimidación, esa misma noche quedó detenido y se le denegó la excarcelación.

Una vez trasladados los heridos, un numeroso grupo de trabajadores se dirigió hasta la misma dependencia policial donde realizaron un piquete en su ingreso y pintaron su frente; por su parte los dirigentes de la MUS reunidos de emergencia durante esa noche convocaron a una huelga de 24 horas para el 21 e instaron a los trabajadores a participar de la marcha hacia Casa de gobierno que se realizaría al día siguiente. En horas de la madrugada del día siguiente, la “Carpa de la dignidad” fue destruida por un incendio intencional.

El 18 de agosto la MUS marchó hacia Casa de gobierno; al llegar los manifestantes comenzaron a retirar el vallado aún existente. Al ingresar a los jardines se produjo un choque con la policía provincial que pretendió en vano frenarlos: se rompieron todos los vidrios del frente del edificio y se realizaron pintadas en el exterior; en ese mismo momento los dirigentes de la MUS intentaban acceder al edificio con el objetivo de entregar un petitorio. Por la noche se produjo un cacerolazo exigiendo la renuncia del Jefe de la policía provincial, Wilfredo Roque, hecho que ya se había consumado horas antes. El ataque a Casa de gobierno por parte de militantes de base y estudiantes fue repudiado por la dirigencia de la MUS.

El día lunes, en una convocatoria realizada por la MUS, organizaciones sindicales, sociales, empresariales y todos los partidos de la oposición⁶¹ se reunieron en las instalaciones del Obispado a fin de solicitarle al gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar la paz social y convocaron a una movilización para el 21, entre otros puntos que se plasmaron en un documento que se dio a conocer durante la marcha. La reunión contó con la presencia del Obispo Romanín, quien fue recibido por los presentes con el canto “obispo querido el pueblo está contigo”.

El 21 de agosto los sindicatos de la MUS concretaron la anunciada huelga general, a la que se sumaron los mineros de Río Turbio y la Cámara de Comercio de Río Gallegos; en la marcha⁶² se leyó el siguiente petitorio: “1° El respeto por la vida y la defensa irrestricta del conjunto de los Derechos Humanos mediante: El juicio y condena a todos los responsables de ordenar y perpetrar los hechos de violencia y represión sufridos; La desmilitarización de la Provincia y el desmantelamiento del aparato represivo; La anulación de la renegociación del acuerdo firmado con la Pan American Energy que compromete el futuro de los habitantes de la provincia; El uso racional y sustentable de los recursos naturales que asegure un ambiente sano y apto para el desarrollo de la vida humana. 2° La plena vigencia de los valores y principios democráticos mediante: Una justicia independiente del poder político; La libertad de prensa, la libertad de expresión, el acceso plural de todos los sectores a los medios oficiales y el libre acceso a la información como derecho constitucional; 3° La atención inmediata a los reclamos pendientes de los distintos sectores gremiales; Aumento

⁶¹ Además de los dirigentes de la MUS y el Obispo Romanín, esa tarde también se dirigieron a los presentes: Gabriela Mestelán, Héctor Barabino y Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano), José Luiz Janezak (Asociación de Abogados), el empresario Carlos Bark, Susana Ruiz (vocal por los pasivos de la CPS), Héctor González (ATE-lista Negra), Jorge Lemos (ATE), Miguel Del Pla (FUT-PO), Eduardo Costa (UCR), Eduardo Arnold (UPSC), Jorge González (Diputado disidente del FPV), Alfonso Lobos (Judiciales), integrantes de la Agrupación 9 de mayo, Andrea Pac (ADIUNPA), Bernardino Zaffrani (MST), integrantes de la Comisión de la “Carpa de la Dignidad”, Silvio Rotman (CCC), Carlos MacNamara (Jubilados Autoconvocados), Eduardo Mansilla (Autoconvocados de APAP), entre otros.

⁶² Antes de la movilización los medios gráficos locales difundieron varias solicitadas en repudio al hecho perpetrado por Varizat: ATE-Río Turbio, La Fraternidad, Asociación Personal Superior Profesional y Técnico de YCRT, Luz y Fuerza-Río Turbio, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Cuenca Austral Santa Cruz, el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, estos gremios además de repudiar los hechos acontecidos el 17 de agosto, manifestaron su apoyo al Gobernador Daniel Peralta. También se conocieron el repudio de la Unidad Académica de Río Gallegos perteneciente a la UNPA, el FUT-Partido Obrero, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego, los ediles justicialistas del Concejo Deliberante de Río Gallegos y un conjunto de Unidades Básicas.

salarial de emergencia; Normalización de los gremios intervenidos”⁶³; entre otros puntos.

El 22 de agosto, por cadena provincial, el gobernador Peralta “anunció un aumento salarial para todo el sector público, activos y pasivos, que comprende el traspaso de los últimos 200 pesos que figuraban como suma no remunerativa a remunerativa y sobre el líquido con esto incluido, un 22% de aumento, sumada a la determinación de llevar el salario básico docente a \$780...”⁶⁴.

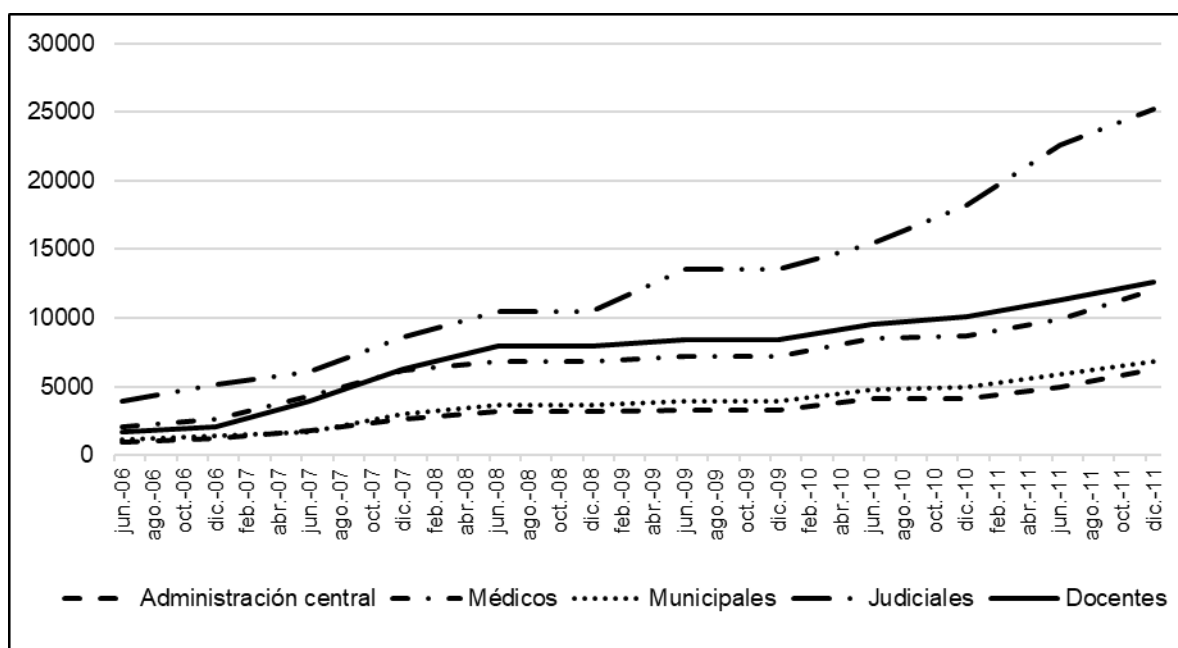
Conforme transcurrieron los días, se sucedieron anuncios y reuniones entre los sindicatos y los poderes del estado. Los trabajadores de la justicia obtuvieron un aumento del 16,5 por ciento y el blanqueo progresivo de las sumas en negro aún presentes en su salario; el porcentaje acordado respondía a la aplicación de la “Ley de porcentualidad” (enganche) que no se implementaba desde la emergencia económica decretada al asumir la gobernación Néstor Kirchner en 1991; por su parte los legislativos obtuvieron en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados un aumento similar al logrado por los trabajadores de la administración central. Igual aumento recibieron los trabajadores municipales de toda la provincia. Los docentes, además de llevar el salario básico a \$780, lograron el llamado a concurso y titularizaciones, la modificación de la antigüedad recibiendo el docente recién ingresado un 10% por tal concepto, la devolución de los días caídos del mes de marzo, mientras quedaron pendientes los puntos referidos a la eliminación total del presentismo y el otorgamiento paulatino de aumentos para llevar el básico a \$1050. Finalmente, tras la huelga del 4 de septiembre, convocada por la ADOSAC, el presentismo fue reemplazado por un ítem denominado “estado docente”, cuyo pago no estaba condicionado por la asistencia.

⁶³ El documento fue firmado por la Agrupación 9 de mayo (SOEM), APADI (Asociación de Padres de Discapacitados), ARI Santa Cruz, Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Asociación de Abogados de Río Gallegos, Asociación Docentes de Santa Cruz, Asociación Docentes Investigadores de la UNPA, Asociación Propietarios de Taxis de Río Gallegos, Asociación de Trabajadores del Estado, Comisión Carpa de la Dignidad, Consejo Directivo de ATE Santa Cruz, Corriente Clasista y Combativa, Diputados Grupo de los Siete, Convocatoria Santacruceña, Encuentro Ciudadano, FUT-Partido obrero, Iglesia Evangélica Casa del Alfarero, Intendente de Río Gallegos, Gremio Judicial Provincial, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Padre Obispo de la Diócesis de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Antártida, Juan Carlos Romanín, Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Sociedad Rural Río Gallegos, Autoconvocados 591, Unión Cívica Radical (UCR), Unidos por Santa Cruz, Vocalía Activos de la Caja de Previsión Social, Comisión de Derechos Humanos Trabajadores Judiciales Nacionales, Jubilados Provinciales Autoconvocados, Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno, Agrupación Multisectorial de la Caja, Eduardo Costa (UCR), Jubilados Provinciales, Asociación del Personal Legislativo de Santa Cruz. *Tiempo Sur*, 22/05/007

⁶⁴ *Tiempo Sur*, 23/05/007

Sin embargo, en materia salarial el impacto de estos cambios no fue parejo, a partir de la resolución de este conflicto y con el transcurrir de los años, las diferencias salariales entre los distintos sectores que componen la administración pública provincial y municipal se profundizaron; los sectores de mayor grado de sindicalización y movilización (docentes, judiciales provinciales y de la sanidad) obtuvieron sustanciales mejoras en sus haberes con relación a los trabajadores de la administración central y municipales, ahondando aún más la brecha salarial existente en el empleo público.

Gráfico N°1 Evolución de haberes de los sectores mayoritarios del empleo público provincial y municipal en pesos, período 2006-2011



Fuente: Elaboración propia en base a: Informe del Directorio de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, diciembre de 2011

La asunción de Daniel Peralta como gobernador en mayo de 2007 descomprimió la situación de conflictividad a partir de la decisión de los cuadros políticos de la burguesía, sea del gobierno provincial o de la oposición, de dirimir su enfrentamiento en las urnas.

En las elecciones de octubre de 2007 la fórmula a gobernador y vice del FPV obtuvo el 58%, resultando Daniel Peralta electo gobernador, frente a la fórmula de la alianza Cambiemos para crecer encabezada por Eduardo Costa. Si bien el FPV retuvo la gobernación, su caudal de votos disminuyó en un 13% con respecto a las elecciones de 2003; por su parte, la UCR mejoró su performance electoral en casi 11 puntos y Encuentro Ciudadano obtuvo en su primera participación electoral representación

institucional en el Concejo Deliberante riogalleguense y en la legislatura provincial; los partidos de izquierda (FUT-PO y MST) no superaron el 1% cada uno de ellos.

6. Resultados

En un contexto nacional caracterizado por la recuperación de derechos laborales, sectores de trabajadores estatales dependientes del estado provincial protagonizaron un conflicto en pos de revertir políticas implementadas en la provincia desde los años noventa del siglo pasado; comenzaban así a recuperar su capacidad de influir en la política laboral del estado provincial.

Pero tal como se desprende de la descripción del conflicto los sectores estatales movilizadas no sólo confrontaron con el partido gobernante en tanto empleador, sino que caracterizaban al gobierno provincial encabezado por el FPV como una “dictadura”; entre los cánticos de los manifestantes era común el “se va a acabar, se va a acabar la dictadura provincial”, en las declaraciones de los cuadros sindicales de la MUS y en diversas solicitudes y comunicados, eran constantes las referencias a que en Santa Cruz se había “perdido el miedo”⁶⁵.

Eran continuas las referencias a la corrupción y a la concentración del poder por parte del FPV en sintonía con expresiones que, a nivel nacional, comenzaban a expresar dirigentes opositores. Los cánticos y consignas de “que se vayan todos” que en diciembre de 2001 expresaban un rechazo generalizado a lo que comúnmente se denomina “clase política”, en Santa Cruz era un cuestionamiento solo a la dirigencia del FPV. La UCR, a pesar de haber acompañado los cambios institucionales efectuados por el FPV en la década de los noventa –en especial la reforma constitucional de 1994 y la ley de lemas– y de haber establecido los mismos mecanismos con relación al empleo público durante sus gestiones al frente de la intendencia de Río Gallegos no fue objeto

⁶⁵Héctor Barabino, integrante del Sindicato Argentino de Televisión filial Santa Cruz sostuvo que “Desde el 5 de marzo [del 2007] a esta parte, con esto que ha sido una verdadera revuelta, no sé si en lo electoral, pero por lo menos en la mentalidad de la gente, en Santa Cruz se perdió el miedo. Por lo pronto ya la gente se anima, sale a la calle y no tienen miedo de pelear por sus derechos (...) se perdió la autorepresión, el no se puede, el que las cosas nunca van a cambiar, y se perdió el miedo, pero porque se ganó lo otro”, entrevista realizada por Aníbal Mosquera, “Santa Cruz perdió el miedo”, en Agosto, Patricia (compiladora), *Patagonia: resistencias a la recolonización del continente*, Rosario, Ediciones América Libre, 2008.

de críticas por los sectores sindicales ni aún por parte de la dirigencia del SOEM Río Gallegos.

A su vez el conflicto profundizó la crisis interna del FPV, iniciada ya en la gobernación de Sergio Acevedo; al desgaste sufrido tras 17 años de gobierno provincial, desde el 2003 el FPV sufrió el alejamiento de sus principales cuadros políticos que emigraron hacia Buenos Aires para ejercer cargos en el gobierno nacional. Estas circunstancias sumadas a la capacidad de movilización de las entidades sindicales limitaron la acción gubernamental a la hora de manejar el conflicto; que el conflicto docente se dirimiera en el ámbito nacional daba cuenta de que, tras la renuncia de Sergio Acevedo producida en marzo de 2006, el poder de decisión en todos los aspectos de la política provincial se había trasladado de la órbita provincial a la nacional.

Centrándonos específicamente en lo sindical, las formas de lucha más utilizadas fueron la huelga general con movilización como la más relevante desde lo cualitativo, y las manifestaciones callejeras, en particular cacerolazos y escraches, como forma de demostración popular de repudio y donde se evidenció en especial, la crítica hacia al FPV. También se utilizaron la toma de edificios, siempre como demostración de rechazo al gobierno, así como cortes de calles y rutas, como forma de demostración de fuerza.

Lugar destacado ocupó la instalación de la denominada “Carpa de la dignidad”, punto de referencia de la protesta social; ante esto la respuesta gubernamental fue vallar la Casa de gobierno ya custodiada por la policía provincial y gendarmería nacional.

Prácticamente todas las acciones que se realizaron fueron organizadas desde la MUS, o por los sindicatos que la conformaban; las acciones que se produjeron por fuera de las organizaciones fueron escraches y en particular los hechos violentos sobre la Casa de gobierno del 18 de agosto de 2007 que recibieran el repudio de la dirigencia de la MUS.

El conflicto que inició con un reclamo de los docentes rápidamente sumó a los demás sectores que conformaban la MUS, que podemos caracterizar como pequeña burguesía asalariada, en proceso de proletarización; la excepción dentro de este frente eran los trabajadores municipales de Río Gallegos, con mayor peso del proletariado y menores niveles salariales.

Ahora bien, la mayoría de los trabajadores estatales, pertenecientes a la administración central provincial, junto con los trabajadores de entes descentralizados

de importante peso –energía, viales, entre otros– se mantuvieron en el Frente de Gremios Estatales que, como se dijo, no confrontaba con el gobierno; no obstante, este alineamiento no se tradujo en una adhesión explícita a la política gubernamental dado que los intentos de movilizar a este sector de los trabajadores en favor del gobierno fracasaron.

La decisión del Frente de Gremios Estatales de no confrontar con el gobierno, tal cual había sido su política desde los años noventa, fue interpretada por los sectores sindicales que protagonizaban el conflicto como propio de una “burocracia sindical” que en pos de sostener sus privilegios rechazaba luchar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, asimismo la falta de respuesta de los empleados de la administración central a las convocatorias a sumarse a las medidas de fuerza se explicaba a partir de su caracterización en tanto clientela política del FPV cuando no de “ñoquis” del aparato estatal.

En el desarrollo del conflicto y siempre en un contexto de crisis política de los cuadros dirigentes del FPV, la MUS fue sumando apoyo también de fracciones de pequeña burguesía no asalariada, comenzando a delinearse la conformación de un movimiento opositor que, por encontrarse en un momento inicial de su constitución, se caracterizó por la heterogeneidad en su composición y en sus intereses.

Este movimiento opositor que en lo inmediato no tuvo representación política claramente definida, tendrá en el principal referente de la Iglesia Católica en la provincia el elemento unificador de sectores que expresaban a priori intereses contradictorios. La Iglesia personificada en el Obispo Romanín, a pesar de mostrarse como mediadora, se alinea con los sectores en conflicto de allí las críticas que recibió tanto del gobierno provincial como nacional por apoyar a los sindicatos. Asimismo, el gobierno provincial denunció inmediatamente la politización del conflicto gremial, acusando a los partidos UCR y FUT-PO, de complicidad con la dirigencia sindical.

No menos heterogénea era la composición del “frente gubernamental”, que a la adhesión, explícita o implícita de los empleados administrativos del estado provincial – el sector más precarizado y peor remunerado de todos los que componen el empleo público provincial–, sumó el apoyo de cámaras empresariales vinculadas a la minería metalífera, a la construcción y a la pesca, inclusive recibió apoyo logístico de parte de la Sociedad Rural de Río Gallegos para brindar alojamiento a los efectivos de gendarmería nacional que arribaron a la provincia durante el conflicto.

En el conflicto del 2007 por un lado comienzan a ser visibles las diferencias que provocarán la ruptura del FPV en diciembre de 2011, momento en que los cuadros políticos vinculados al kirchnerismo, renuncian a sus cargos en el gobierno provincial, produciéndose así la formación de dos líneas internas: el kirchnerismo representado por las agrupaciones La Campora y Kolina y el PJ que inclua a todos los sectores del peronismo no kirchnerista. Por otro lado el antikirchnerismo en consonancia con lo ocurrido a nivel nacional, comienza a dar forma a un frente de todas las fuerzas polticas opositoras, a excepcion de la izquierda, que aglutinara en forma progresiva a la UCR, Encuentro Ciudadano, Frente Renovador, Pro y la Coalicion Civica-ARI.

La MUS se consolido a partir de este conflicto social como una intersindical que representa los intereses econmico-corporativos de un sector de los trabajadores estatales. En el plano poltico no se propuso conducir la alianza opositora, ms bien delego esta facultad en la oposicion tradicional referenciada en la UCR y en Encuentro Ciudadano, agrupacion poltica que se presentaba como una renovacion en el plano de lo poltico pero que estaba integrada por ex referentes frepasistas que a fines de la dcada de los noventa haban conformado junto a la dirigencia de la UCR la Alianza. Para las elecciones generales de 2015 ambas expresiones formaran parte de la alianza Cambiemos a nivel nacional. Con el transcurrir de los aos, no pocos representantes sindicales de activa participacion en este conflicto se convertiran en candidatos de los partidos opositores al kirchnerismo.

Bibliografa

Agosto, Patricia (compiladora), *Patagonia: resistencias a la recolonizacion del continente*, Rosario, Ediciones Amrica Libre, 2008

Auzoberra, Miguel; Luque, Elida y Martnez, Susana, (2007) *Los '70 y la crisis poltica en Santa Cruz. La cada del Gobernador Rayneli*; Bs. As, Ed. Dunken.

Azpiazu, Daniel, Pablo Manzanelli, Martn Schorr, (2011) *Concentracion y extranjerizacion en la economa argentina en la posconvertibilidad*, Bs. As, Capital Intelectual.

Daz, Claudio, (2010) *El movimiento obrero argentino. Historia de lucha de los trabajadores y la CGT*. Bs. As, Ed. Fabro

Godio, Julio y Alberto Robles, (2008) *Los tiempos de CFK. Entre la movilización y la institucionalidad. El desafío de organizar los mercados* Bs. As., Ed. Corregidor

Iñigo Carrera, Nicolás, “Indicadores para la periodización (momentos de ascenso y descenso) en la lucha de la clase obrera: la huelga general. Argentina 1992-2002”, en *PIMSA (Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la sociedad argentina)*, Documentos y Comunicaciones 2008-2009, BsAs, PIMSA, 2010, Año XII, N°12.

PIMSA, Documento:” Los hechos de rebelión en Argentina 2002-2007” en *PIMSA (Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina)*, Bs As, PIMSA, 2009, Año XI, N° 11.

Lozano, Claudio (coord.), *Las inconsistencias del índice salarial del sector público. Un análisis a la luz de los datos oficiales*, Bs As., Instituto de Estudios y Formación-CTA, abril/2008.

Luque, Elida, Susana Martínez, Miguel Auzoberría, Hugo Huenul (Grupo Contraviento), (2003), “Conflictos sociales en la provincia de Santa Cruz. Los años noventa”, en *PIMSA (Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la sociedad argentina)*, Documentos y Comunicaciones 2003, Bs As, PIMSA, Año VII, N°7.

Luque, Elida y Susana Martínez, “Los trabajadores de la zona norte de Santa Cruz frente a la emergencia del movimiento de desocupados”, en Iñigo Carrera, Nicolás (Dir.), (2011), *Sindicatos y desocupados en Argentina 1930/35 – 1994/2004. Cinco estudios de caso*, Vicente López, PIMSA – Dialektik.

Luque, Elida, Susana Martínez, Miguel Auzoberría, Hugo Huenul y Christian Britos, “La hora de los estatales: la huelga del 2007. ¿Un hito en la historia de los trabajadores de Santa Cruz?”; ponencia presentada en las IV Jornadas Internacionais de Problemas Latino-americano, Universidade Federal da Intregração Latino-americana (Unila); Foz do Iguazú, Brasil, 27 a 29/11/014.

Marticorena, Clara, “Precariedad laboral y caída salarial. El mercado de trabajo en la Argentina post convertibilidad”, 7mo. Congreso Nacional de Estudios de Trabajo. ASET. <http://www.aset.org.ar/congresos/7/02008.pdf>.

Marx, Karl (1992), *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*, Madrid, Espasa Calpe.

PIMSA, “Documento: Los hechos de rebelión en Argentina 2002-2007”, en *PIMSA, Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina*, Documentos y Comunicaciones 2007, Bs As, PIMSA, 2009

Recalde, Héctor, *Una historia laboral jamás contada...1869-2012*, Bs. As., Corregidor, 2012.

Varela, Paula, *Los sindicatos en la Argentina kirchnerista: entre la herencia de los 90 y la emergencia de un nuevo sindicalismo de base*, en, Revista Archivos del movimiento

obrero y la izquierda, N°2, versión digital: <http://www.archivosrevista.com.ar.ca1.toservers.com/contenido/wpcontent/uploads/2014/09/Varela.pdf>